



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

“N., H. R. - G., R. R. s/  
recurso de casación”  
P. 106.807 y acum.  
P. 108.817

Suprema Corte de Justicia:

**I. La Sala II del Tribunal de Casación Penal**

rechazó con costas, en lo que interesa destacar, los recursos de casación interpuestos a favor de “H.R.N” y de “R.R.G” contra las sentencias que los condenaran a la pena de prisión perpetua, accesorias legales, costas e inhabilitación absoluta perpetua por considerarlos coautores del delito de imposición de torturas a una persona privada de la libertad agravada por su muerte (v. fs. 194/214).

**II. Contra esa sentencia presentaron recursos**

extraordinarios de inaplicabilidad de ley, de nulidad y de inconstitucionalidad los defensores particulares de “R.R.G” (fs. 323/363 vta), habiendo sido concedido el primero y desestimados los restantes por V.E. (v. fs. 410).

Fundando el remedio concedido, la defensa de

R.R.G entiende, en primer lugar, que el *a quo* incurrió en absurdo valorativo al atribuirle a su asistido la coautoría del hecho. Consideran que la sentencia es arbitraria y que se aparta de los principios rectores del debido proceso, violando así la garantía de defensa en juicio de su asistido.

En este sentido expresan que el *a quo* incluyó caprichosamente como coautor a su defendido cuando el mismo, además de ser un oficial de impecable trayectoria, había sido destinado a la dependencia donde se desencadenaron los hechos, destacando que no era persona de confianza de ninguno de sus superiores como para que alguien se pudiese animar a hacerlo intervenir en el hecho allí ocurrido.

Adunan que la sentencia es arbitraria pues no existe elemento probatorio valedero alguno, ni siquiera algún indicio serio, preciso y concordante con el resto de prueba invocada para poder condenar a su asistido, quien resultara incluido en el grupo de policías intervinientes en el hecho por mero prejuicio y capricho de los juzgadores.

Afirman que nadie vio a su defendido infligiendo castigos, ni propinando golpes o tormentos de ninguna índole ni a la víctima “ S.D ” ni a ningún otro aprehendido.



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

Entienden que el *a quo* ha hecho hincapié en la supuesta configuración del elemento subjetivo especial que requiere el tipo penal, pero omitió señalar a través de qué medios y con qué objetivo se pudieron haber aplicado y/o se produjeron los tormentos, para tener por configurado el elemento objetivo del tipo penal.

En segundo lugar manifiestan que el hecho atribuido a su defendido es “atípico” ya que no se ha comprobado el componente subjetivo del mismo en cuanto no pudo probarse que el joven “S.D.” hubiese sido torturado.

En este sentido indican que no existiendo componente subjetivo del tipo de imposición de tormentos seguidos de muerte, por no haber podido el *a quo* acreditar, ni la posible motivación ni tampoco el porqué se podría haber querido atormentar al joven “S.D.”, ni mucho menos se demostró la posible vinculación existente entre los tormentos aplicados al detenido y la causa real de su posterior fallecimiento, consideran que se está frente a un hecho atípico, por ende se debería anular la condena dictada en autos, citando en su apoyo la sentencia dictada en la causa “Russo, Leandro

Ismael, Ch á vez, Jos é Luis y Rivero, Juan Antonio ” por la Sala II del Tribunal de Casaci ó n Penal.

Precisan los defensores que las lesiones no son causantes, por s í mismas de muerte, y entienden que si se las analiza una por una, de acuerdo con su tiempo de evoluci ó n y se cotejan con el horario de la muerte las mismas se le infligieron al detenido entre las 22 ó 24 hs del d í a anterior, y con relaci ó n a los muslos, 48 hs antes, o sea el 4 de agosto, mientras que el fallo en crisis considera acreditado que el joven “S.D ” fue torturado en la Comisar í a 1a de Mor ó n el d í a 7 de agosto de 1992, m á s precisamente entre las 3 y las 6 horas de esa jornada, situaci ó n que impedir í a vincular dichas lesiones con los hechos que se le incrimina como coautor a su defendido.

En atenci ó n a lo expresado, solicitan que se anule la sentencia atacada y se absuelva a su asistido, haciendo reserva del caso federal.

**III.** Contra la misma sentencia del Tribunal de Casaci ó n, la Defensora Adjunta ante esa sede interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de “ H.R.N ” .

Advierte la recurrente que pese a que alguno de los t ó picos planteados en el recurso extraordinario no fueron parte de las cr í ticas



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

incoadas por el Defensor Oficial que laborara en la instancia, ello no obsta a su inclusión en este grado de desarrollo del proceso, tanto más cuanto dicha motivación fluye a partir de la doctrina emanada de la CSJN dictada en los autos “Casal, Matías Eugenio y otros/robo simple en grado de tentativa -causa n° 1681-” ; “Velardez, Rodrigo David s/ robo agravado por el uso de arma, etc. -causa n° 164- sent del 15/8/2006; ref: (V.1100.XL); “Recurso deducido por el defensor oficial de Esteban Rolando Coria en la causa Coria, Esteban Rolando s/ homicidio calificado y violación en grado de tentativa -causa n° 27061-” (sent del 27/12/2006) y “Zeballos, José Luis” (sent del 10/4/2007; ref Z.149.XLI).

Asimismo cita lo prescripto en el art. 8.2.h de la CADH y el art. 14.5 del PIDCP como garantía del doble conforme en razón del fallo condenatorio pronunciado en perjuicio de su asistido.

Aduna a lo dicho que dado el carácter constitucional de los agravios respecto del fallo en crisis deviene aplicable la doctrina de la CSJN sentada a partir de sus precedentes dictados en in re “Strada” (fallos: 308:490), “Christou” (L.L. 1987 -D-156) y “Di

Mascio ” (Fallos: 312:2084).

Desarrollando los concretos motivos de agravio en los que funda su reclamo, denuncia la violación del plazo razonable en el ámbito del trámite de todo el proceso, conforme lo dispuesto por el art. 8.1 de la CADH en las condiciones de su vigencia, ello con arreglo al entendimiento jurisprudencial de dicho instituto que efectuase la CSJN.

En este sentido pone de resalto la pertinencia temporal de la pretensión deducida teniendo en cuenta que la queja gira en relación con la eventual extinción de la acción penal por prescripción.

Siguiendo el análisis, entiende que el *a quo* no valoró con precisión el alcance del derecho constitucional que le asiste a su defendido a ser juzgado y obtener una sentencia definitiva en un plazo razonable, conforme lo dispone el art. 15 de la Constitución Provincial, los art. 7.5 y 8.1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 9.3 del PDCP por ende también el art. 75 inc 22 de la Constitución Nacional.

Se ala que desde la fecha de ocurrencia de los eventos imputados hasta el debate oral y público, transcurrieron once años; y desde la interposición del recurso de casación hasta la actualidad, un lapso de



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

tiempo cercano a los seis años.

Cita la agraviada la ley 24390 -autoproclamada reglamentaria del art. 7.5 de la CADH- entendiendo que no parecería, en principio, admisible extender los términos fijados por la citada norma en perjuicio del imputado. En apoyo a su análisis cita precedentes emanados de la CIDH, para concluir que corresponde entender -en principio- como plazo máximo para la consideración del plazo razonable del art. 8.1 de la Convención el fijado por la ley 24390 (es decir; tres años y seis meses), por encima del cual todo exceso sería irrazonable.

Al efecto deduce que en un caso como el de autos, donde ha sido dictada la prisión preventiva y ésta restricción derechos -por imperio de la interpretación de los organismos internacionales de DDHH de los normado por el art. 7.5 de la CADH- tiene una duración determinada, -a su entender- carecería de sentido admitir que el plazo al que hace alusión el art. 8.1 de la misma Convención podría extenderse más allá de lo prescripto por la ley 24.390. Esto por dos razones: la primera, relacionada con la imposibilidad de reanudar una coerción procesal en los casos que haya cesado definitivamente la

razonabilidad del encierro preventivo y la segunda relacionada con la imposibilidad constitucional del legislador provincial de establecer pena, conforme el art. 75 inc. 12 de la CN, pues la eventual fijación en la legislación provincial de un término mayor, sería a título de sanción penal y no de coerción procesal.

Sostiene la recurrente que en la misma línea de pensamiento, la CIDH elaboró criterios para la determinación de la razonabilidad de la duración del proceso, en lo que atañe al art. 8.1 de la CADH, y que ellos son 1) la complejidad del caso, 2) la conducta del inculpado y 3) la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso.

Cita lo dicho la Comisión Interamericana en el informe 12/96 y por la Corte en los casos “ Genie Lacayo ” , del 2/1/1997, “ Suarez Rosero ” , del 12/11/1997, “ Paniagua Morales ” , del 8/3/1998 y “ Bayarri vs Argentina ” del 30/10/2008 para determinar la razonabilidad de la duración del proceso en su totalidad, indicando que a) los elementos probatorios fueron obtenidos en los primeros momentos de la investigación, por lo cual la complejidad de la causa no es un extremo a considerar en este sentido; b) que su asistido se limitó, a lo largo de todo el proceso, a hacer uso de sus derechos constitucionales -básicamente, a recuperar el goce de su libertad ambulatoria y a





**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

obtener una revisión integral de la sentencia de condena-, por lo que su actitud procesal no es un obstáculo para la obtención del derecho reclamado y c) el hecho de no haber logrado en alrededor de 6 años una decisión definitiva en la órbita del proceso recursivo, importa falta de diligencia debida por parte de las autoridades, la cual, no puede ser cargada sobre el justiciable.

Cita también, en el mismo sentido, jurisprudencia emanada de la Corte Europea, entre ellos “Terranova vs Italia” sentencia del 4/12/95, “Phocas vs Francia” sentencia del 23/4/96 y “Süssmann vs Alemania” del 16/6/96.

Entiende la Defensora Adjunta que el Estado ha renunciado en forma explícita a hacer cumplir sobre los justiciables la pena que les fuera impuesta, lo que lleva como consecuencia necesaria la cancelación de la posibilidad de la respuesta punitiva, sin que el desinterés o las problemáticas propias de la burocracia estatal se pongan a cargo de aquellos, con el objetivo de no reconocerles el derecho a una rápida conclusión del proceso.

Explica la agraviada que si bien la falta de diligencia debida por partes de las autoridades se deriva del exceso de tiempo

respecto del establecido en la ley 24390, la evidencia de baches temporales injustificados en la instancia casatoria se desprende de la lectura de los antecedentes. Cita como ejemplo que, desde la llegada del legajo a la sede casatoria hasta la consulta respecto de la realización de la audiencia oral de informes y desde este acto procesal hasta el dictado de la sentencia definitiva transcurrieron sendos períodos mayores a dos años.

Sostiene que, ante la afectación de derechos que se denuncia, la extinción de la acción penal por prescripción aparece como el remedio jurisdiccional idóneo para salvaguardarlos, atento la doctrina del Superior Tribunal Federal en la materia. En apoyo a su análisis la agraviada cita los precedentes de Fallos 316:1328; 213:2075; 272:188; 300:1102 y 322:360 y la causa “Podestá, Arturo Jorge y López de Belva, Carlos A. y otros s/defraudación en grado de tentativa y prevaricato” sentencia del 7/3/2006.

Solicita en definitiva la recurrente se decrete la extinción de la acción penal por prescripción, dado que resulta ser ésta la medida idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo, salvaguardándose así el derecho de su asistido a obtener una decisión definitiva en el proceso sin dilaciones indebidas del mismo,



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

garantizándose a través de los mecanismos procesales ordinariamente establecidos, la subsanación de una realidad asimilable a una denegatoria de justicia (fallo 314:697), ellos de conformidad con lo normado por los arts. 18 y 75 inc 22 de la CN, arts 7.5 y 8.1 de la CADH, art 9.3 del PIDCP, 16 segunda parte, de la ley 48, 1 y 9 de la ley 24390, arts. 141, 169 inc 10 y cc del CPP y la citada doctrina de la CSJN.

En subsidio, sostiene la recurrente que la sentencia atacada resulta arbitraria, por violación al principio de necesaria correlación entre la imputación y el fallo derivado del artículo 18 de la CN.

Indica que el defensor anterior de “H.R.N” , desde un comienzo de la etapa de revisión, criticó el fallo definitivo puesto que entendió que el mismo adoleció de un vicio de nulidad insalvable, el que se vinculó con el extremo jurisdiccional de sumar ultrafinalidades a las descripciones fácticas objetivas por las que aquel fue sometido a proceso.

Argumenta que el tribunal intermedio admitió la existencia de modificaciones en el sustrato fáctico por el que finalmente fue condenado su asistido, aunque consideró que esas mutaciones no devenían

susceptibles de provocar la alegada violación a la garantía de la defensa en juicio, precisando que la circunstancia de haber incorporado al *factum* la ultrafinalidad que guiara el deceso de la víctima, al no devenir en un requisito típico de la figura de aplicada, no afectó a la necesaria correlación entre la imputación y el fallo y no provocó al imputado ningún agravio.

Critica lo concluido por el a quo puesto que la modificación del sustrato fáctico entre la acusación y la sentencia, la violación a la defensa en juicio deviene -de acuerdo a la doctrina legal de V.E.-incuestionable, y el fallo dictado en contra de la misma se convierte en una sentencia arbitraria, por cuanto se ha apartado de los precedentes dictados en la materia por la Corte sin brindar fundamentos pertinentes para tal manera de resolver. Cita los precedentes “Tarifeo” (La ley, t-1995-B), “García, José Armando” sentencia del 22/12/1994, “Ferreyra, Julio” sentencia del 20/10/95, “Cattonar, Julio Pablo” sentencia del 13/6/1995, “Cáceres, Martín H.” sentencia del 25/9/1997, “Fiscal c/Fernandez, Pedro Ricardo” sentencia del 27/2/2001 y “Mostaccio, Julio Gabriel” sentencia del 17/2/2004 de la Corte Nacional.

Argumenta la Defensora Adjunta ante el Tribunal



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

de Casación que de dicha doctrina se extraen importantes consecuencias, entre ellas que la requisitoria de elevación de la causa a juicio no constituye acusación y que sólo reviste tal condición cuando es completada con el alegato final del Fiscal en donde se esgrime la hipótesis final fundada en las pruebas del debate y se formula el concreto pedido de pena.

En definitiva, se ala la recurrente que la diferencia existen entre la descripción fáctica de los hechos atribuidos en la acusación y los contenidos en la sentencia respecto de las acciones disvaliosas acontecidas, ha impedido a su asistido y a sus distintos asesores letrados ejercer fehacientemente su derecho de defensa, pues se quebrantó el contradictorio al sumar ultrafinalidades a aquellas, afectándose así la necesaria correlación entre la imputación y el fallo.

En esta inteligencia solicita la recurrente la nulidad parcial de la sentencia de condena, en cuanto se ha violentado la congruencia, extremo que impide -a su entender- una nueva persecución penal sobre el punto, por cuanto ello afectar ía el non bis in eadem. Entiende que este proceso no podr ía reenviarse a instancias procesales ya precluídas, por cuanto esto

importar í a una doble persecuci ó n penal por el mismo hecho.

Solicita, por todo ello, se dicte la libre absoluci ó n de su asistido respecto del hecho que se le atribuyera, formulando expresa reserva del caso federal.

**IV.** El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los defensores particulares de “ R.R.G” no puede prosperar.

Como se indicara al rese ar los motivos de agravio tra í dos por esa parte, los recurrentes formulan tres motivos de agravio claramente identificables vinculados con el modo en que se tuviera por acreditada la activa intervenci ó n de “ R.R.G” en el hecho objeto de la presente causa, con la atipicidad de la conducta que se le atribuye al conjunto de activos que aqu é l integraba y, finalmente, con la posibilidad de establecer con certeza que las lesiones causadas al joven D fueran causa de su deceso.

El primero y el ú ltimo de estos planteos se vinculan, claramente, con la valoraci ó n de la prueba, materia exclu í da del á mbito de competencia de esa Suprema Corte (doct. art. 494 CPP).

Ha dicho en este sentido esa Suprema Corte que



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

cuando “ las cuestiones tra í das se refieren al mé rito de los elementos de prueba considerados o -por el contrario-desconsiderados por el sentenciante para ratificar lo resuelto en este aspecto por el tribunal de juicio ello constituye materia que excede el acotado ámbito de conocimiento de esta Corte por el and é n recursivo incoado ” (SCBA P. 97369 sentencia del 27/4/2011).

En el mismo sentido ha precisado que “ las cuestiones de hecho y prueba no son revisables en esta instancia extraordinaria salvo supuestos excepcionales que no han sido denunciados y no concurren en el caso, donde la defensa se limita a exponer meras opiniones contrarias a lo resuelto por el juzgador sin lograr evidenciar vicio alguno en su razonamiento (doct. arts. 355 y 360, C.P.P. -t.o. según ley 3589 y sus modific.-; P. 64.541 y P. 77.778, ambas sents. del 23-IV-2003; P. 67.954, sent. del 14-V-2003; P. 61.840, P. 75.778 y P. 73.643, todas sents. del 21-V-2003; P. 74.730 y P. 76.890, ambas sents. del 28-V-2003; P. 68.267, sent. del 29-X-2003; P. 68.114, sent. del 3-XII-2003; P. 66.655, sent. del 23-XII-2003; e.o.) (SCBA P. 109.446 sent. del 6/10/ 2010), doctrina particularmente aplicable al caso pues, no obstante la expresa referencia de los impugnantes a la doctrina de la arbitrariedad fá ctica o valorativa, el

remedio no contiene más que la reiteración de la divergencias respecto de la ponderación de la prueba formuladas en la instancia precedente y despejadas por el tribunal intermedio.

Además, y en la medida que los recurrentes se limitan a reiterar -en lo sustancial- los embates que llevaron a conocimiento del tribunal *a quo*, omiten refutar los argumentos de la alzada en sentido contrario a su pretensión, incurriendo de este modo en manifiesta insuficiencia (doct. art. 495 del CPP).

El segundo de los agravios, en el que se alega la atipicidad de la conducta atribuida al grupo de funcionarios policiales que participaron activamente en el desarrollo de los hechos, también se desentiende por completo de lo resuelto al respecto por el tribunal intermedio.

En efecto, puede apreciarse que el tribunal *a quo* indicó expresamente que el tipo del art. 144 tercero, segundo párrafo, del Código Penal no exigía para su configuración de una especial *motivación* que se adiera al dolo del tipo subjetivo correspondiente, descartando además -con el desarrollo de una argumentación no controvertida- que los tratados internacionales relacionados con la materia impusieran la necesidad de adicionar una exigencia de





**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

ese tipo a la figura delictiva allí descripta.

También concluyó el Tribunal intermedio, respondiendo a planteos formulados ante la instancia casatoria y que exceden el ámbito de revisión que habilita el art. 494 del CPP, que era razonable la conclusión a la que se arribara en la instancia de origen al afirmar que al detenido “ S.D ” *“lo encerraron en la oficina del servicio de calle y, durante aproximadamente dos horas y media, lo golpearon y le aplicaron corriente eléctrica sobre la piel del escroto”* (fs. 202 y vta.), precisando más adelante que estos padecimientos y su duración revestían *“a los ojos de cualquiera ”*, gravedad suficiente para ser considerados tormentos.

Ninguno de estos argumentos, relacionados tanto con la normativa aplicable como con las constancias concretas de la causa, ha recibido respuesta alguna en el extenso escrito en el que se funda el remedio bajo análisis, circunstancia que impide considerarlo infundado el planteo de *“ a tipicidad ”* que introducen los esmerados defensores.

También es insuficiente el reclamo formulado en subsidio, con el que se pretende desplazar la calificación legal del hecho hacia la

figura del homicidio preterintencional (art. 81 inc. b del CP), pues el reclamo no ha sido acompañado con una argumentación que le de sustento, la que resultaba particularmente exigible en el caso, toda vez que la cuestión había recibido una respuesta concreta -acertada y contundente, a mi entender- en el pronunciamiento atacado.

Puede apreciarse, en este sentido, que el Tribunal intermedio indicó que la figura del art. 144 tercero, inc. 2° del Código Penal comprendía, desplazando en consecuencia por especialidad, al homicidio preterintencional cuando las lesiones que causaran la muerte de la víctima formaron parte de los tormentos que se le aplicaran (v. fs. 206 vta.), razonamiento que -como adelantara- no ha sido objeto de una crítica eficaz por parte de los recurrentes.

Conforme lo hasta aquí expuesto y en virtud de lo normado por los arts. 494 y 495 del CPP, he de propiciar el rechazo del remedio bajo análisis.

V. El recurso extraordinario incoado por la representante del Ministerio Público de la Defensa a favor de “H.R.N” tampoco puede tener acogida favorable.



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

El primero de los agravios tra í dos por la defensa, vinculado con la excesiva duraci ó n del proceso, resulta extempor á neo.

Ello es as í pues la defensa de “ H.R.N” tuvo la oportunidad de formular un planteo de ese tenor con la interposici ó n del recurso de casaci ó n, teniendo en cuenta que a esa altura del proceso ya hab í a transcurrido el plazo de tres a os y seis meses que la propia recurrente toma como l í mite despu é s del cual toda extensi ó n del proceso se torna irrazonable. Ni en esa oportunidad (v. fs. 98/102 del legajo n° 15.631), ni en el memorial presentado por la Defensora Ajunta de Casaci ó n -Dra. Biasotti- al desistir de la celebraci ó n de la audiencia de informes (fs. 161/164, idem), se formulo reclamo alguno al respecto cuando hab í a transcurrido sobradamente el plazo mencionado.

Ha dicho esa Suprema Corte en este sentido que el *reclamo vinculado a la excesiva duraci ó n de la etapa de revisi ó n del proceso no ha sido introducido en tiempo oportuno, lo cual frustra el trá nsito adecuado de esa pretensi ó n por ante el ó rgano prioritariamente habilitado a su tratamiento, cuando el t é rmino invocado en el recurso hubiera transcurrido antes de dictarse la sentencia del tribunal intermedio sin que la problem á tica del plazo razonable*

*fuera siquiera mencionada, invocando la doctrina de la C.S.J.N., in re, "Bassi Parides" Fallos 328:121, cons. 8, concluyendo que "así las cosas, el agravio debe desecharse dado que, en todo caso, en la instancia anterior ya tenía actualidad e interés su formulación y no se reparó en esa circunstancia"* (cfr. doct. SCBA en causas P. 98.134, sent. del 16/9/2009, P. 105.494 y P. 100.593 ambas del 9/6/2010; P. 104.418 sent. del 20/10/2010, 105.743 sent. del 26/10/2010; P. 102.794, sent. del 9/12/2010; P. 107.875 sent. del 2/3/2011; P. 104.998, sent. del 23/3/2011, e/o)

También ha dicho esa Suprema Corte y estimo oportuno recordar que la solución jurisprudencial dada a la dilación irrazonable del proceso a través del instituto de la prescripción de la acción penal posee notas distintas a los presupuestos legales y taxativos establecidos en el Libro I, Título 10 del Código Penal, diferencias de las que el recurrente no se hace cargo al reclamar el tratamiento del planteo formulado fuera de tiempo afirmando que la prescripción de la acción penal es de orden público y por ello declarable aún de oficio (art. 495, C.P.P.; cfr. SCBA P. 105.646, sent. de 10/6/2009, P. 106.879 sent. del 7/7/2010 y P. 104.998, sent. del 23/3/2011).

Sin perjuicio de ello, advierto que el reclamo



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

resulta además insuficiente, ya que la supuesta violación del plazo razonable en el curso de la etapa recursiva alegada, no encuentra en el escrito defensorista una argumentación consistente que lo respalde (art. 495 CPP).

En primer lugar, cabe destacar que la recurrente comienza su análisis partiendo de la premisa de que todo plazo de proceso superior a los tres años y seis meses es irrazonable, pero llegando a tal certeza sólo a partir de su propia y particular interpretación de las normas legales y constitucionales (en especial de la ley 24.390 y del artículo 141 del Código Procesal Penal), sin considerar la doctrina que sobre la cuestión se desprende de los antecedentes de ese Alto Tribunal.

Frente a ello cabe hacer notar que reiteradamente esta Procuración General ha sostenido que “ pese a la reiterada terminología de ‘plazo’ razonable, no existe ni a través de la legislación ni en la jurisprudencia, una clara referencia que especifique cuál es ese plazo, o partir de qué momento - o de qué acto procesal- la duración de un proceso resulta irrazonable, y se vulnera entonces aquel derecho constitucional” .

También que “ más allá de las críticas o

cuestionamientos que ello pueda acarrear, lo cierto es que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria ha recurrido -a fin de verificar la transgresión de ese derecho- a examinar 'ex post processus' en cada caso concreto distintos parámetros que pueden indicar la razonabilidad de la demora” (dictámenes recaídos en causas P. 94754, del 14.03.2006; P. 95853, del 22.09.2006; P. 102136 del 30.08.2009, entre otros).

En igual sentido V.E. ha dicho que más allá del intento por fijar un determinado plazo máximo, “nuestro ordenamiento jurídico carece de una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, predominando, en cambio -no libre de críticas-, la llamada 'teoría de la ponderación', según la cual “no es dable fijar el plazo razonable 'en abstracto' ni establecerlo en un número preciso de días, semanas, meses o años, sino que los jueces deben evaluar, caso a caso, si la prolongación de un proceso ha sido o no razonable, teniendo en cuenta la magnitud del retraso, sus motivaciones, el perjuicio ocasionado, el comportamiento del imputado, el de las autoridades, entre otros criterios a ponderar” (conf. P. 94.681, sentencia del 13.12.2006 y P. 102873 sentencia del 11.03.2009, entre otras).

Bajo estos lineamientos, la postura en contrario de



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

la defensa tendiente a establecer un plazo concreto, se muestra sólo como una opinión discrepante con la doctrina prácticamente unánime que, por otra parte, se asienta en precedentes de la Corte Interamericana y de la Corte Europea de Derechos Humanos que la propia recurrente invoca.

En efecto, ha dicho el organismo regional mencionado que “es preciso tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales 135, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso” (cfr. Corte IDH Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia del 3 de abril de 2009. Serie C N° 196., ap. 112, con cita de los precedentes “*Genie Lacayo*”; “*Suárez Rosero*”; “*Bayarri Vs. Argentina*” y “*Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*”), descartando de este modo la posibilidad de estimar *a priori* y a partir de un periodo de tiempo predeterminado la razonabilidad del tiempo insumido por la tramitación del proceso.

Pese a la exprese mención de alguno de los precedentes citados, la recurrente omite vincularlos con las concretas constancias

de la causa para dar concreto fundamento a su reclamo, pues se limita a dejar constancia de los periodos de tiempo transcurridos entre distintos actos procesales, sin tener en cuenta que en el caso se investigaba la comisión de un delito de particular gravedad, cometido en el ámbito de una dependencia de una fuerza de seguridad, que involucraba a numerosos imputados, permaneciendo varios de ellos -entre otros, el propio “H.R.N” - prófugos de la justicia por extensos periodos de tiempo, debiendo celebrarse más de un debate oral y dictarse más de una sentencia de primera instancia para arribar a la unificación del trámite -en lo que respecta a los imputados “ F ” , “ N ” y “ G ” - recién en la instancia casatoria.

Este panorama, delineado en gruesos trazos, indica a las claras que el caso presentaba una complejidad particular y que la actividad procesal de los imputados distó bastante de la neutra “ falta de colaboración ” que alega la defensora. No es posible entonces, como pretende la impugnante, inferir del mero transcurso del tiempo una falta de diligencia de las autoridades judicial que pudiera ameritar la adopción de una solución extrema como la que pretende.

Se suma a las antes mencionadas una variable que





**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

la recurrente omite considerar, vinculada con la gravedad del delito por el que fuera condenado su asistido -considerado coautor de tormentos infligidos por funcionarios p ú blicos a una persona privada de la libertad, agravados por su muerte- par á metro que debe ser tomado en cuenta a los fines de resolver sobre la extinci ó n de la acci ó n por vulneraci ó n de la garant í a alegada, como lo han hecho en casos an á logos la Corte federal y esa Suprema Corte provincial (CSJN "Acerbo Né stor Horacio s/ contrabando causa N 51.221" sent. del 21 de agosto de 2007 y consid. 21 del voto de la minor í a conformada por los jueces Petracchi y Boggiano en el caso "Kipperband", Fallos 322:360, citados por esa Suprema Corte en P. P. 100.057 "P é rez " , sent. del 4/11/2009; P. 103.606 " Clivio " , sent. del 17/11/2010 y P. 100.251 " Ch á vez " , sent. del 10/3/2011). Cabe agregar que, en el caso, esta variable asume particular trascendencia en virtud del compromiso internacional asumido por el Estado Argentino respecto de la investigaci ó n y castigo de actos de esa naturaleza (cfr. arts. 2, 4, 5, 6 y ccs. de la " Convenci ó n contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes " , ONU AG 10/12/1984, art. 1° ley 23.338, art. 75 inc. 22 CN).

Por ú ltimo, advierto que los precedentes de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación que invoca la recurrente no resultan aplicables al presente, pues la solución en ellos adoptada partió de supuestos fácticos totalmente disímiles.

En efecto, en “Mattei” (Fallos 272:188) la tramitación del proceso implicó la absolución del acusado en primera instancia, decisorio que luego el Tribunal de alzada anuló para retrotraer el proceso a la clausura de la etapa preliminar, en razón de no haberse dispuesto oportunamente todas las medidas necesarias para el esclarecimiento del hecho y en “Mozzatti” (Fallos 300:1102) la Corte Suprema dictó sentencia el 17 de octubre de 1978 poniendo fin a un proceso iniciado en el año 1953. Luego de una sentencia condenatoria de primera instancia en 1963, la alzada había revocado la decisión absolviendo a los acusados dos años después. En su primera intervención, la Corte Suprema se expidió a dieciséis años del hecho (en 1969) y resolvió anular las absoluciones y reenviar el proceso a la segunda instancia, órgano que dictó una nueva sentencia ahora condenatoria. Llegados los autos nuevamente al Tribunal Superior a 25 años de iniciada la causa, se emitió entonces el resolutorio ahora invocado por la defensa, poniendo fin al proceso por el instituto de la prescripción de la acción penal.



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

En la causa “ Barra, Roberto s/ Defraudación por administración fraudulenta” , resuelta por el Superior Tribunal federal el 9 de marzo de 2004, se trataba de un proceso tendiente a investigar presuntas maniobras fraudulentas, iniciado 16 años antes de llegar la causa a conocimiento del Tribunal Superior, y en el que el Ministerio Público Fiscal formuló acusación luego de transcurridos 11 años y cinco meses de iniciado el proceso.

La breve reseña de los precedentes citados pone en evidencia que ninguno de ellos se asimila al caso de autos, en el que los imputados han sido condenados en primera instancia a medida que los juicios orales respecto de cada uno de ellos pudieron concretarse, unificándose luego el trámite en la instancia de revisión y confirmándose todos los pronunciamientos condenatorios dictados. Por lo tanto, y en la medida que la recurrente omite explicar adecuadamente los motivos por los que estima que lo decidido en aquellos resulte de algún modo aplicable en autos, el remedio aparece insuficiente también en este aspecto.

Conforme lo hasta aquí expuesto, estimo corresponde rechazar esta primer motivo de agravio.

El segundo de los agravios traídos por la representante de la Defensa Pública tampoco puede ser atendido.

Retomando la línea argumental desarrollada por quienes la precedieran en ese ministerio, la Defensora Adjunta de Casación sostiene que el tribunal de mérito que juzgara a “H.R.N” incorporó a la materialidad il í cita reconstruida una serie de ultra finalidades que no formaban parte de la acusación, circunstancia admitida expresamente por el tribunal intermedio y que implicaría -a su entender- una violación al principio de congruencia o correlación, con la consecuente afectación del derecho de defensa que importa la sorpresiva incorporación al fallo de aspectos no debatidos por las partes.

Entiendo que el planteo resulta insuficiente, pues no rebate los concretos fundamentos que sustentan la respuesta negativa que la cuestión mereciera en la instancia precedente.

Puede apreciarse, en este sentido, que la impugnante afirma que *“en los casos en que se produzca una mutación esencial de la base fáctica atribuida, allí si se ha producido un quebrantamiento de las reglas del debido proceso...”* (v. fs. 394) destacando a continuación que el



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

propio *a quo* admitió la existencia de una mutación fáctica en el caso. Sin embargo, y pese a lo manifestado en el pasaje transcripto, nada alega la impugnante en torno al carácter *esencial* de aquél cambio en la descripción de los hechos, aspecto en el que se centra la respuesta que la cuestión recibiera en el fallo de casación.

En efecto, el Tribunal intermedio admitió la existencia de un cambio o mutación en la base fáctica, mas destacó que los hechos -subjetivos- adicionados a la materialidad descripta por la acusadora no configuraban exigencias típicas relevantes en el caso, conforme una interpretación armónica de los textos de los arts. 144 ter del Código Penal, 1° de la Convención contra la tortura antes citada y los arts. 1°, 2° y 6° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Con este marco, que demuestra que aquella modificación de la base fáctica no resultaba esencial y determinante para la suerte del proceso, se descartó la existencia de un perjuicio efectivo derivado de la inobservancia de las formas procesales denunciada (v. fs. 203/205).

Podría decirse, en otras palabras, que si la defensa

no pudo controvertir adecuadamente aspectos fácticos que en nada inciden en los términos en los que fuera condenado el imputado -pues no constituyen aspectos relevantes para determinar el encaje legal del hecho o dosificar la sanción-, no es posible derivar de la introducción de aquellos en el fallo una concreta disminución en el ejercicio del derecho de defensa en juicio, pues la defensa no pudo haberse visto sorprendida con ningún hecho que en definitiva tuviera la virtualidad de empeorar la situación procesal del acusado respecto de lo planteado por la acusadora y del que, en consecuencia, necesitara defenderse. En este sentido, se ala Julio B. Maier, en la obra citada pro la recurrente, que lesiona al principio de correlación o congruencia “*Todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un **dato con trascendencia en ella**, sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir...*” (conf. Maier, Julio, *Derecho Procesal Penal*, T. I., Buenos Aires, Editores del Puerto, 2004, pág. 568, el destacado me pertenece),

El argumento del magistrado del primer voto en el fallo atacado, avalado por autorizada doctrina, no es objeto de una crítica eficaz en la presentación de la defensa ante esta sede, en la que insiste la recurrente en destacar la existencia de una mutación fáctica y propiciar la anulación del fallo,



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

sin demostrar en modo alguno la relevancia de aquella ni la existencia del perjuicio concreto que el *a quo* descartara, deficiencia que en nada se modifica con la dogmática afirmación de fs. 400 vta. referida al impedimento que aquella importara para el *fehaciente* ejercicio del derecho de defensa, ni con la impertinente cita de los pronunciamientos de la Corte Federal en los que se basa la distinción entre imputación y acusación, aspecto irrelevante en el caso.

Sin perjuicio de lo expuesto, que pone en evidencia la manifiesta improcedencia del reclamo, cabe señalar que la esmerada defensora atribuye a un eventual éxito de su reclamo una serie de consecuencias que la llevan desde la nulidad parcial del fallo hasta la libre absolución de su defendido, sin tener en cuenta que la nulidad parcial propiciada llevaría a la inmediata exclusión de la base fáctica -reconstruida en primera instancia y confirmada por el revisor- de las ultrafinalidades no incluidas en la acusación, circunstancia que, como ya indicara el *a quo*, en nada modificaría la situación del imputado, quien de todos modos quedaría condenado como coautor de tormentos infligidos por funcionarios públicos a una persona privada de la libertad, agravados por su muerte, a la pena de prisión perpetua (art. 144 ter., inc. 2° CP), no resultando

necesario para ello el reenvío de la causa a la instancia de origen ni la celebración de un nuevo juicio.

Considero, entonces, que corresponde rechazar sin más, por insuficiente, el segundo de los agravios articulados por la defensa de “ H.R.N” (ar.t 495 CPP).

**VI.** Por lo expuesto, he de aconsejar a esa Suprema Corte rechace en todos sus términos los recursos extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuestos por la Defensa Particular de “ R.R.G” y la Defensora Oficial que asiste a “ H.R.N” en esta instancia.

Tal es mi dictamen.

La Plata, 10 de junio de 2011.

Fdo: María del Carmen Falbo. Procuradora General de la SCBA.